



## **5. INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO BERNABEY**

### **Derecho de Acceso a la Información Pública**

En las sociedades primitivas la información estaba reservada solo a unos pocos por los que pasaba el manejo político, económico y hasta religioso. Sin dudas la información fue y es valiosa y un elemento de poder en la medida que constituye la base del conocimiento y de la acción.

En la actualidad y como pieza fundamental del sistema democrático, la información constituye un derecho consagrado por la Constitución Nacional, que, si bien no se encuentra explícitamente enumerado, debe entenderse dentro de aquellos no enumerados pero que derivan de la forma republicana de gobierno, plasmados en el artículo 33 de la Carta Magna. Es sencillo advertir, que buena parte de los derechos explícitos, no podrían ejercerse adecuadamente sin contar con la información suficiente emanada de los organismos públicos.

En 2003 el presidente Kirchner dictó el decreto N° 1172 por medio del cual se hizo explícito el derecho de los ciudadanos a acceder a la información que generan los diferentes organismos del Poder Ejecutivo. Para ello, instituyó un mecanismo que obliga a los mismos a brindar la información que los ciudadanos le requieran, dentro de los plazos que se establecen a tal fin, perentorios y con escasas restricciones justificadas que se derivan de la norma.

Esta política fue un primer paso para el reconocimiento del derecho a la información pública como un derecho derivado de nuestro régimen político, que requiere la publicidad de los actos de gobierno.

Pero si bien esta norma ratificaba como expresamos anteriormente, un precepto constitucional, el acceso a la información pública como derecho, entendido como la posibilidad de exigir que el Estado ponga a disposición de todos cada uno de sus actos y por dos vías: la de la exhibición de la mayor cantidad posible de datos y la de respuesta rápida a cada una de las consultas. No se ha plasmado todavía en una ley que asegure la plena vigencia de esta herramienta democrática.

No tenemos dudas que los funcionarios públicos y los representantes del pueblo deben rendir cuenta de sus actos.

Hasta acá, la experiencia no resulta nada alentadora y nos alerta sobre los obstáculos que enfrenta todavía el derecho a la información pública en nuestro país, obstáculos relativos tanto al acceso a las fuentes, como de ocultamiento o tergiversación de los datos.

Debemos entender que es este el derecho que concreta todo aquello que repetimos respecto del pueblo soberano, el pueblo que otorga un mandato, y la reglamentación de este derecho es herramienta fundamental de ese control del mandante sobre el mandatario, y hace nada más y nada menos que al ejercicio efectivo de una ciudadanía desarrollada y plena.

En la actualidad, son muchos los países que cuentan con una normativa en la materia, y



#### Dirección de Información Parlamentaria

en la región pocos los que aún no la tienen, entre ellos la Argentina que, en virtud de los compromisos asumidos, tiene una deuda.

Luego de la reforma constitucional de 1994, se incorporaron al texto de la Ley Superior variados tratados internacionales de derechos humanos, que contemplan el acceso referido. Por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dispone en su artículo 19-2 que: "Toda persona tiene el derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección."

En la misma línea se puede citar a la Convención Americana sobre Derechos Humanos que en su artículo 13.1 establece: "...la libertad de pensamiento y de expresión... comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole...", o la Declaración Universal de Derechos Humanos que establece en su artículo 19 que: "Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión."

En idéntico sentido deben interpretarse los artículos 10 y 13 de la Convención de la Naciones Unidas contra la Corrupción, así como el párrafo 5 de su Preámbulo y los artículos 11.11 y XIV de la Convención Interamericana contra la Corrupción, que promueven la transparencia, el acceso a la información pública y la participación de la sociedad civil en la lucha contra la corrupción.

La propia Corte Interamericana de Derecho Humanos, haciendo una interpretación de su artículo 13 citado, expreso en autos "Claude Reyes v. Chile" que: "...el artículo 13 de la Convención, al estipular expresamente los derechos a 'buscar' y a 'recibir' 'informaciones', protege el derecho que tiene toda persona a solicitar el acceso a la información bajo el control del Estado, con las salvedades permitidas bajo el régimen de restricciones de la Convención. Consecuentemente, dicho artículo ampara el derecho de las personas a recibir dicha información y la obligación positiva del Estado de suministrarla, de forma tal que la persona pueda tener acceso a conocer esa información o reciba una respuesta fundamentada cuando por algún motivo permitido por la Convención el Estado pueda limitar el acceso a la misma para el caso concreto. Dicha información debe ser entregada sin necesidad de acreditar un interés directo para su obtención o una afectación personal, salvo en los casos en los que se aplique una legítima restricción. Su entrega a una persona puede permitir a su vez que ésta circule en la sociedad de manera que pueda conocerla, acceder a ella y valorarla."

Pero el derecho a la información pública, tiene también respaldo jurisprudencial a nivel nacional. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho en autos "Asociación por los Derechos Civiles cl PAMI" que: "El fundamento central del acceso a la información en poder del Estado consiste en el derecho que tiene toda persona de conocer la manera en que sus gobernantes y funcionarios públicos se desempeñan, mediante el acceso a la información.", criterio que reiteró en "CIPPEC c. Estado Nacional - Ministerio Desarrollo Social - decreto. 1172/03 s/ amparo ley 16.986", en el que formuló al Poder Legislativo a sancionar una ley en la materia.

En el ámbito internacional, diferentes instancias jurisdiccionales, como la OEA o la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han reiterado que el acceso a la



#### Dirección de Información Parlamentaria

información constituye un derecho humano y que debe ser promovido y protegido como tal por los Estados.

De esta forma, señor presidente, creemos fundamental el paso que estamos dando al poner en tratamiento en esta casa, un proyecto de ley que constituye una herramienta para el fortalecimiento democrático y el control ciudadano de los actos públicos.

Sólo sobre la base del conocimiento podremos hacer lecturas adecuadas de la realidad social y tomar decisiones bien fundadas nosotros como representantes del pueblo y los ciudadanos como reales mandantes soberanos.

La sanción de esta ley impediría que las distintas administraciones, cualquiera fuera su signo político, oculten o difundan datos imprescindibles para el diseño, la evaluación y el control de ejecución de las políticas públicas.

Por todo lo expuesto, señor presidente, adelanto mi voto positivo.

## **7. INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO BORSANI**

### **Derecho de Acceso a la Información Pública**

La importancia de aprobar la presente ley de acceso a la información pública implica brindar a los ciudadanos una herramienta fundamental para la lucha contra la corrupción y el control de las políticas públicas que ejercen los funcionarios, constituyendo también la puerta para el ejercicio de otros derechos fundamentales como son los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, tales como la libertad de expresión, la salud, la educación, el cuidado del ambiente o un empleo digno.

El proyecto que hoy estamos debatiendo tiene por objeto, tal como dispone su artículo 1º, garantizar tres cosas:

- 1.- El efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública,
- 2.- Promover la participación ciudadana y
- 3.- Brindar transparencia a la gestión pública.

¿Qué significa esto? Es el reconocimiento por parte del Estado de un “derecho humano”. Toda persona debe poder acceder a la información pública.

Hablar de transparencia es hablar de un derecho, del derecho de acceder a la información pública. La transparencia es una condición necesaria -pero no suficiente- para poder ejercer este derecho. Por ejemplo cuando un gobierno transparenta las cuentas públicas permite que tanto la ciudadanía como los otros poderes del Estado evalúen las políticas públicas que se llevan adelante con los fondos que provienen de los impuestos.

El presente proyecto que se pretende aprobar da lugar a la estrechísima relación entre el acceso a la información y la salud de las finanzas públicas: i) la transparencia puede ayudar a atraer crédito internacional más barato; ii) la falta de transparencia en cuestiones fiscales puede debilitar la disciplina fiscal de los países; iii) la transparencia y la participación del público pueden ayudar a ubicar las fugas y mejorar la eficiencia del gasto público; iv) la transparencia y la participación del público fomentan la equidad



#### Dirección de Información Parlamentaria

al alinear los recursos nacionales con las prioridades nacionales.

Un ciudadano que accede a la mayor cantidad de información posible es un ciudadano que ejerce mejor sus deberes y derechos, en particular en lo que refiere a evaluar y elegir a sus representantes.

El acceso a la información pública es entonces un derecho colectivo que titularizan todos los habitantes de la República, que ha sido considerado por la Corte Suprema de Justicia como una precondition de la democracia y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como uno de los derechos fundantes de todo proceso.

Nuestra Constitución Nacional contempla el derecho de acceso a la información pública dentro del esquema de los derechos fundamentales.

De sus artículos 1° y 33° surge la obligación del Estado de dar publicidad a los actos de gobierno, con el consiguiente derecho de la sociedad de conocer los mismos, y de esta manera poder controlarlos a través de su derecho a peticionar, el voto y la posibilidad de incoar acciones judiciales.

Actualmente, la regulación del derecho de acceso a la información pública recae únicamente en el decreto 1172 del 3 de diciembre de 2003, el cual si bien al momento de su dictado fue una esperanza para la consagración del derecho, lejos está de los estándares mínimos internacionales en materia de transparencia, y en la práctica se advierten múltiples dificultades para su implementación.

Cabe señalar que a lo largo del tratamiento del presente proyecto se enfatizó sobre el hecho que el derecho al acceso a la información pública no puede ser objeto de restricciones que pongan en riesgo su efectivo ejercicio o de interpretaciones que lo restrinjan, y esto es cierto, pero lo más importante es que de ahora en más, los distintos gobiernos no van a poder manipular la información, esconder actos de corrupción, mentirle a los ciudadanos que los han votado.

Este proyecto corre el velo a los gobiernos corruptos, dice basta a la negligencia y a la irresponsabilidad con la que fueron tratados nuestros ciudadanos.

Este proyecto es gobernar a futuro, pensar en un gobierno responsable, transparente y leal a la gente.

Por todo esto es que tenemos la obligación, como legisladores elegidos democráticamente, de garantizarles a los ciudadanos argentinos no sólo un libre acceso a la información sino el pleno cumplimiento de nuestra Constitución Nacional y honrar los tratados internacionales que hemos firmado.

Por ello, y con la firme convicción que es necesario avanzar hacia un Estado transparente, democrático y fortalecer las instituciones contando con políticas de gobierno abiertas a la transparencia, al control ciudadano y que desalienten prácticas de corrupción, mi decisión es apoyar el presente proyecto de ley.

## **10. INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO BRIZUELA DEL MORAL**

### **Derecho de Acceso a la Información Pública**



#### Dirección de Información Parlamentaria

El proyecto de ley de acceso a la información pública que estamos tratando no es un tema menor, tras más de tres décadas de tránsito democrático de las instituciones de la República, lo que muestra prima facie, que estamos afrontando una deuda histórica de magnitud para la República.

El acceso a la información pública está íntima y estrechamente ligado al concepto mismo de la República, al concepto base de la obligación de los diversos estamentos del Estado, de dar a publicidad sus actos, aquellos ligados a la administración de la cosa pública, de la cosa de todos.

Y aunque resulte una verdad de Perogrullo, vale decirlo: esto no es lo mismo que la propaganda estatal sino que se trata de la posibilidad del soberano -el pueblo- de conocer todo lo que al gobierno concierne según sus intereses y solo limitado por las excepciones especialmente previstas en la norma.

Sin ningún lugar a dudas, esta norma es una herramienta fundamental en la lucha contra la corrupción, porque esta posibilidad o facultad de los ciudadanos de acceder a la información pública significa el ejercicio de un control más allá del que pudieran ejercer los órganos estatales, los que a veces, según las coyunturas ocasionales, pueden mal cumplir su obligación de controlar.

Estimo que luego del decurso de más de treinta años de la plena vigencia de la Constitución y del derecho existe en nuestra sociedad la percepción generalizada de la corrupción como una práctica endémica al interior del Estado argentino, y de los Estados subnacionales, tanto provinciales como municipales, cuestión que debemos rescatar de la agenda social y colocarla como prioridad en la agenda política.

Todos sabemos que el incremento de la corrupción y la percepción de la ciudadanía en torno a la clase política que se ve arrastrada por hechos de corrupción, se erigen en una capitis diminutio para el sistema democrático mismo, y por ende, en un estado de impunidad creciente, en perjuicio de la calidad de vida de los ciudadanos, si es que no existen señales claras del propio sistema político para poner un freno a ese estado de cosas.

Es por ello que presenté en su momento un proyecto, que cuenta con dictamen de comisión, para otorgar jerarquía constitucional al Convenio Interamericano contra la Corrupción.

Este tipo de normas está dirigido a quitar los velos y sombras que empañan la labor estatal, en todos sus departamentos y, extrañamente, ha sido la esfera nacional casi la última en abordar esta cuestión central de la vida democrática

Cuando en mi provincia - mientras era gobernador- se sancionó la ley 5.336, de acceso a la información pública, al dar cuenta de dicha sanción, el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) celebró la nueva ley provincial a la vez que reclamó a este Congreso de la Nación sancione la ley que hoy estamos tratando. Han pasado varios años, pero finalmente estamos cumpliendo una deuda legislativa de larga data a nivel nacional. Por ello, señor presidente, mi voto y el del Frente Cívico y Social de la provincia de Catamarca, es positivo.

## **12. INSERCIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA DIPUTADA CAMAÑO**





## **Derecho de Acceso a la Información Pública**

Voy a dejar la redacción de este artículo en Secretaría porque ya sé que el diputado Tonelli no la va a aceptar. Les pido que la lean porque no tiene desperdicio, está muy bien desarrollada y va en consonancia con los requerimientos que nos han hecho durante todos estos años las organizaciones no gubernamentales en materia de penalidades, que es lo que en definitiva hace que la ley se cumpla.

“Artículo 18.- Responsabilidades. Los funcionarios que incumplan los deberes impuestos por esta ley serán pasibles de las sanciones disciplinarias que se establecen en este artículo, sin perjuicio de las demás responsabilidades que por otras leyes correspondan. Las conductas que se consideran falta disciplinaria y sus sanciones son las siguientes:

“a) la falta de respuesta a una solicitud de información y la denegatoria al acceso o a la entrega de información, sin fundamento en las excepciones previstas en esta ley, serán sancionadas con suspensión sin goce de haberes de entre diez (10) y treinta (30) días;

“b) la entrega o puesta a disposición de la información en forma incompleta o defectuosa o con omisión de las formas, los plazos o las modalidades establecidas en esta ley y en sus reglamentaciones, será sancionada con suspensión sin goce de haberes de entre cinco (5) y veinticinco (25) días;

“c) el incumplimiento de las resoluciones por las que la Autoridad de Aplicación resuelva los recursos de apelación administrativa será sancionado con cesantía.

“d) el incumplimiento de otros requerimientos expedidos por la Autoridad de Aplicación será sancionado con suspensión sin goce de haberes de entre diez (10) y treinta (30) días.

“e) cuando el sujeto obligado haga, ordene, autorice, avale o consienta, directa o indirectamente, la destrucción, eliminación, borrado o afectación de cualquier tipo de información pública bajo su custodia, será pasible de cesantía e inhabilitación perpetua.

“Cuando corresponda la aplicación de una nueva suspensión y de ello resulte la acumulación de cuarenta (40) o más días de suspensión para el funcionario, será aplicada la cesantía por razón de reincidencia.

“Las sanciones son aplicadas por las autoridades competentes y de acuerdo con los procedimientos administrativos propios del régimen al que se encontrare sujeto el funcionario; y de acuerdo con las circunstancias acreditadas, el grado de culpa o dolo, el perjuicio ocasionado y los antecedentes que registrare el funcionario en relación con el cumplimiento de esta ley.

“La comisión de cualquiera de las infracciones precedentes, invocadas con culpa o negligencia, son sancionadas con una pena de hasta 1/3 de la prevista, para la infracción correspondiente.

“El solicitante de la información, los terceros interesados y la Autoridad de Aplicación competente pueden instar los procedimientos sumariales y la aplicación de las sanciones previstas en este artículo e intervenir en calidad de parte en las actuaciones judiciales respectivas. A los efectos de lo dispuesto en este párrafo, la Autoridad de Aplicación competente deberá ser informada de modo inmediato y fehaciente de toda actuación sumarial de acuerdo con lo establecido en este artículo.

“Están excluidos del régimen disciplinario de este artículo el Jefe de Gabinete de



#### Dirección de Información Parlamentaria

Ministros, los ministros del Poder Ejecutivo, los jueces de la Nación, los legisladores nacionales y los magistrados del Ministerio Público, los cuales quedan sujetos a las responsabilidades previstas en la Constitución Nacional, las normas orgánicas respectivas y el Código Penal de la Nación.

“Las Autoridades de Aplicación deben reglamentar el procedimiento en su respectivo ámbito, el cual debe garantizar el ejercicio pleno del derecho de defensa.

“Todas las sanciones aplicadas a los sujetos obligados deben ser publicadas de modo permanente en el sitio web de la Autoridad de Aplicación pertinente.

“El plazo de prescripción para aplicar las sanciones disciplinarias previstas en este artículo es de dos (2) años desde la comisión de la falta, y únicamente será interrumpido por la comisión de una nueva falta, la iniciación del sumario y la resolución que lo concluya. La resolución que impusiere la sanción será impugnabile únicamente por un recurso directo de apelación ante la Cámara con competencia en lo contencioso administrativo del lugar de comisión de la falta.

“En el caso de los sujetos obligados cuyos órganos de gobierno o representantes legales no fueren funcionarios públicos, los responsables de alguna de las conductas tipificadas se encuentran sujetos a la sanción de multa de entre uno (1) y veinte (20) salarios mínimos vitales y móviles. La multa será impuesta judicialmente a petición del solicitante o de la autoridad de aplicación competente, y su monto se graduará de acuerdo con los estándares mencionados en el 2º párrafo de este artículo y con la capacidad económica del sujeto.”

## 14. INSERCIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA DIPUTADA CASELLES

### Derecho de Acceso a la Información Pública

Quiero adelantar mi voto positivo a este proyecto de ley de acceso a la información pública. Es, sin lugar a dudas, un pilar fundamental del sistema democrático de gobierno y del Estado de derecho; busca garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública promover la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública.

Vengo a decir sí, como representante de los sanjuaninos, a una ley que permitirá a la sociedad conocer la información que refleja las decisiones emanadas de los poderes del Estado. Vengo a decir sí a una ley que es, sin lugar a dudas, estratégica porque permitirá a todos los argentinos y a todas las argentinas ejercer aún más plenamente otros derechos esenciales y participar en la vida democrática a partir de contar con más y mejor calidad de información para la toma de decisiones.

Sin embargo, así como digo sí a esta ley, también estoy en el deber de preguntarme y repreguntarme acerca de qué se entiende por “información pública”. ¿Cuáles son aquellas informaciones que tienen carácter de interés público? Porque no sea cosa que caigamos en el error de creer que solo lo proveniente del Estado es información pública, como pareciera que se desprende por el alcance de los sujetos obligados que se definen



#### Dirección de Información Parlamentaria

en esta ley. Es necesario ser plenamente conscientes de que la información de interés público es aquella que es de utilidad para promover el bien común para el conjunto de nuestras hermanas y hermanos argentinos.

Por último, y no por ello menos importante, considero que una ley que goza de consenso entre muchos legisladores, miembros del Poder Ejecutivo y representantes de la sociedad civil, se queda corta al proponer una autoridad de aplicación designada por el Poder Ejecutivo sin pensar en una instancia superadora donde la elección sea de esta casa, que es la casa del pueblo o, aún más, en un diseño institucional de mayor pluralidad con una autoridad de aplicación colegiada.

## 18. INSERCIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA DIPUTADA COPEs

### **Derecho de acceso a la información pública.**

Ante todo, debo decir que me siento realmente afortunada de poder estar aquí siendo parte del debate por una Ley de Acceso a la Información Pública. Agradezco especialmente a los redactores del proyecto, a la iniciativa del Ejecutivo para intentar saldar esta gran deuda que tiene nuestro país, a todos los diputados y a todas las diputadas que han participado en las discusiones, y a todas las organizaciones de la sociedad civil que han luchado sin descanso por una ley de acceso a la información pública.

En nuestro país, el derecho de exigir al poder que rinda cuentas e informe sobre sus actos y decisiones ha estado siempre amenazado por una larga tradición y cultura del secreto que ha hecho carrera del ocultamiento de documentos públicos, ya sea recurriendo al engaño, la desidia o incluso al uso de la fuerza. Por eso precisamente es que esta ley es una de las mayores deudas que tenemos como democracia.

Sabemos que a nivel internacional el reconocimiento del derecho al acceso de la ciudadanía a la información pública se desarrolló tardíamente. Cuando en 1946 la Asamblea General de Naciones Unidas manifestó el carácter trascendental de la libertad de información -intercambiar información y acceder a toda aquella ya publicada-, ese derecho existía en forma efectiva solamente en Suecia.

Actualmente, se encuentra regulado en muchos tratados internacionales. Entre ellos la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención Interamericana contra la Corrupción, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por otro lado, existe una ley modelo de la OEA que generó grandes consensos, que plantea los estándares mínimos que deben ser tenidos en cuenta para toda ley de acceso a la información pública.

Por su parte, Argentina ratificó estos tratados internacionales que contemplan el acceso a la información pública como un elemento central para toda democracia. En este marco, en el inciso 22 del artículo 75 de nuestra Constitución se estableció el reconocimiento del derecho humano a la información a partir de esos pactos internacionales.





#### Dirección de Información Parlamentaria

No voy a ahondar en este punto porque se ha dicho mucho al respecto, pero además de la incorporación de esos tratados internacionales a nuestro cuerpo normativo, cabe recordar que el derecho al libre acceso a las actuaciones administrativas ya se encontraba en el texto constitucional de 1853, cuando garantizaba el derecho de defensa en juicio y la publicidad de los actos de gobierno. Entonces, no solo es una columna del principio republicano sino también un mandato constitucional, hasta ahora incumplido. Siete fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación van en ese mismo sentido.

Algunos de ellos son muy conocidos por todos. En 2012, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó un fallo trascendental en materia de acceso a la información en el caso “Asociación Derechos Civiles contra EN-PAMI- decreto 1.172/03 sobre amparo ley 16.986”, en el cual la ONG ADC pidió acceder a información sobre la distribución de la publicidad oficial de PAMI. En ese fallo, la Corte reconoció el derecho de todos los ciudadanos a acceder a la información pública. Lo mismo sucedió con el caso “CIPPEC contra Estado Nacional - Ministerio Desarrollo Social - decreto 1.172/03 sobre amparo ley 16.986” en el que CIPPEC solicitó al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación datos de las transferencias en gastos corrientes realizadas por el Estado nacional al sector privado durante 2006 y 2007. La Corte decidió a favor de CIPPEC y sostuvo: “(...) no puede admitirse la negativa fundada en la necesidad de resguardar la privacidad de los beneficiarios, ya que esta mera referencia, cuando no se vincula con datos personales sensibles cuya divulgación está vedada, desatiende el interés público que constituye el aspecto fundamental de la solicitud de información efectuada, que no parece dirigida a satisfacer la curiosidad respecto de la vida privada de quienes los reciben, sino a controlar eficazmente el modo en que los funcionarios ejecutan una política social”. Para ello, la Corte rastreó el fundamento jurídico del derecho a buscar y recibir información de los actos de gobierno que se deriva de la interpretación de los artículos 1º, 14, 16, 32 y 33 de la Constitución Nacional y en los tratados internacionales ratificados por Argentina.

Sumado a esto, en 2003 se sancionó la ley 25.831 de Régimen de Libre Acceso a la Información Pública Ambiental que regula a nivel nacional el acceso a la información en materia ambiental. En resumen, podemos decir que el derecho de acceso a la información pública se encuentra ampliamente reconocido por el ordenamiento jurídico argentino.

En otras ocasiones hemos estado muy cerca de sancionar una ley. Si bien se han presentado proyectos desde la década de los 90, el primero en lograr sanción se remonta a 2001, cuando la Oficina Anticorrupción elaboró un proyecto en el que participaron ONG, periodistas y funcionarios. Esa iniciativa fue enviada en 2002 al Congreso y fue aprobada en la Honorable Cámara de Diputados en 2003. El Senado la trató un año después, introdujo cambios y eso provocó que volviera en revisión a la Cámara baja en 2004. Las disidencias entre el oficialismo y la oposición impidieron que se transformara en ley y perdió estado parlamentario en 2006. El segundo intento casi exitoso fue en 2009, cuando en la Cámara de Senadores se dio sanción a un proyecto de ley que contenía principios básicos y aceptables, consensuado sobre la base de proyectos presentados por diversos senadores. Sin embargo, durante 2010 y 2011 dicho proyecto no logró ser tratado por el pleno de la Cámara de Diputados y perdió estado parlamentario.

## Dirección de Información Parlamentaria

Por otro lado, el acceso a la información pública ha sido reglamentado a través de diversas regulaciones que establecieron mecanismos para su ejercicio en el orden provincial y municipal. Como en muchos otros casos, la regulación de este derecho es dispar a lo largo del país y la implementación de las normas varía en cada provincia. No obstante, aún con este impresionante marco jurídico internacional, nacional y provincial, hasta el momento la Argentina continúa siendo uno de los tres países de la región que no tiene una ley de acceso a la información pública.

Sí contamos con el decreto 1.172, que en diciembre de 2003 estableció un marco importantísimo para el acceso a la información pública, aunque aplicable sólo al Poder Ejecutivo y las instituciones que dependen de él. Este régimen representó una mejora significativa y fue bienvenido por un amplio espectro político y de la sociedad civil. Sin embargo, con el paso del tiempo pudimos apreciar claras limitaciones y falencias, que estaban estrechamente vinculadas a la falta de una ley que estableciera parámetros más claros, que fije obligaciones precisas de transparencia activa y que cree un órgano de aplicación autónomo e independiente con capacidad de promover políticas de transparencia hacia adentro de la administración.

Para dar cuenta de esas dificultades, podemos mencionar algunos de los informes de ONG en los que se observan las dificultades efectivas en el acceso a la información. Por su parte, el informe publicado por ACIJ -Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia- en 2013 arrojó los siguientes resultados: casi el 41 por ciento de los pedidos resultaron incompletos o no contestados y solo el 27 por ciento cumplió con los criterios de completitud y adecuación establecidos en el decreto. Por otra parte, en el informe de seguimiento realizado por ADC -Asociación por los Derechos Civiles- se consignó que el 53 por ciento de los pedidos realizados fueron respondidos de manera incompleta o de forma negativa, o directamente no fueron respondidos. En definitiva, lo que se observa es que la falta de una ley de acceso a la información pública abre el campo a la discrecionalidad y lleva a que el cumplimiento efectivo de ese derecho quede librado a la “buena predisposición” de las agencias estatales y los funcionarios.

Esto no puede continuar. El régimen de acceso actualmente vigente ha demostrado ser insuficiente para proteger y promover el derecho al acceso a la información pública e incapaz de contrarrestar la cultura del secreto que aún persiste en muchos ámbitos del Estado argentino.

Esto mismo sucede en la provincia de Santa Fe, donde si bien es cierto que desde el año 2009 cuenta con una herramienta para el acceso a la información pública -el decreto 692/09-, ésta no alcanza para eliminar todos los obstáculos y barreras que persisten y que no pueden ser vencidas sino a través de una ley que instituya, definitivamente y sin lugar a duda alguna, el derecho al acceso a la información pública.

El Partido Demócrata Progresista ha trabajado en función de esto desde el retorno de la democracia. De hecho, actualmente existe un proyecto con una gran cantidad de adhesiones, además de otros presentados dentro del Frente Progresista Cívico y Social. Desde el PDP estamos convencidos de que el acceso a la información pública es un instrumento imprescindible para toda democracia; por ello hemos insistido con nuestro proyecto de ley logrando que tuviera sanción en la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe durante los años 2001, 2002, 2005 y 2009.

La construcción de una administración sobreprotegida fundamentada sobre un supuesto resguardo del interés general, no solo no tiene respaldo jurídico sino que además se ha



## Dirección de Información Parlamentaria

utilizado para esconder la ineficacia y la corrupción burocrática del Estado. Tenemos que entender de una buena vez que el secreto es propio de una actitud autoritaria y autocrática, y que implica una negación del control democrático de los actos de gobierno. La publicidad de las decisiones estatales no interfiere con la organización o la administración de un país. Esta no es más que una excusa para negar un derecho. Más bien funciona del modo contrario: la publicidad refuerza la legitimidad de esas decisiones. Esta es una de las ideas que hemos sostenido firmemente desde el PDP, aún siendo parte de una coalición oficialista en Santa Fe. Lo van a encontrar en todos los fundamentos de nuestros proyectos sobre este tema: la supuesta contradicción entre la eficacia estatal y el reclamo ciudadano de publicidad de los actos de gobierno, no es más que una mentira. O, si se quiere, parte de un paradigma que concibe la transparencia como un obstáculo y el secreto como una necesidad para la eficacia estatal.

Esta ley tiene que ser el primer paso para la ruptura de ese paradigma, porque lo cierto es que detrás de todos esos incumplimientos y dilaciones existe una concepción “privatizadora” de la información que desconoce o ignora que los documentos del Estado no constituyen papeles privados de los gobernantes o de los funcionarios sino que pertenecen a toda la ciudadanía.

Saludamos este debate precisamente por eso. Porque es el primer paso hacia un cambio de paradigma sobre la información pública. Un nuevo paradigma en el que la información no es propiedad del Estado sino que pertenece a los ciudadanos, y en el que el acceso a ella no se debe a la gracia o favor de un gobierno sino al cumplimiento de un derecho ciudadano. Precisamente porque la democracia requiere, en primer lugar, de una ciudadanía informada cuyo acceso a una amplia gama de información pública le permita participar de forma plena en la vida pública y, en segundo término, de mecanismos de modernización y transparencia que contribuyan al fortalecimiento de la ética y la probidad pública.

Asimismo, sabemos que esta lógica participativa de la transparencia también constituye un elemento angular para garantizar el cumplimiento de otros derechos, sencillamente porque la falta de producción y distribución de información impacta negativamente en el ejercicio de otros derechos por parte de los ciudadanos, situación que -como también sabemos- afecta especialmente a los grupos más vulnerables.

En definitiva, el acceso a la información pública constituye nada menos que un derecho humano. El derecho humano a saber, a investigar, a estar informado, a debatir, a intervenir en los asuntos públicos, a defender derechos, a proponer, etcétera.

El acceso a la información es un elemento central para alimentar el debate público, dar contenido a la democracia y generar los mecanismos suficientes de control y rendición de cuentas. En otras palabras, es en democracia que se producen espacios de discusión y de confrontación de ideas, y una ley de acceso a la información pública es una herramienta indispensable para que eso suceda.

Sólo cuando hayamos comprendido esto es que podremos entender la magnitud de la tarea en la que este proyecto nos embarca. Es en función de ese desafío que hoy enfrentamos diputados y diputadas, que me permito mencionar algunas de las consideraciones que el bloque Demócrata Progresista considera que podrían engrandecer el proyecto.

En ese sentido, debemos partir de la gran ampliación de las entidades obligadas que



## Dirección de Información Parlamentaria

encontramos en el proyecto, especialmente si se tiene en cuenta que el decreto vigente incluye solo al Poder Ejecutivo nacional y sus organismos dependientes. A diferencia de esto, el proyecto que hoy nos ocupa establece como sujetos obligados a una gran variedad de entidades tanto del Ejecutivo como del Poder Legislativo y del Poder Judicial, junto con muchos otros que se encuentran por fuera de sus órbitas pero que perciben recursos estatales y, por ende, poseen información que es de dominio público. Otro punto realmente importante a destacar de este proyecto es la incorporación de los principios rectores para su interpretación, especialmente en lo que respecta a la máxima divulgación y la legitimación activa. Esto resulta clave para acotar el espectro de posibles interpretaciones que busquen eventualmente restringir el acceso a la información pública. Estos principios aseguran que ningún ciudadano que solicite información tenga que dar explicaciones acerca de las razones o motivos por los cuales la solicita, sino simplemente porque es su derecho pedirla. Este es el eje central del cambio de paradigma del que hablábamos antes.

En tercer lugar, es digno de mención el capítulo en donde se detalla la información que todos los sujetos obligados deben publicar en sus páginas web, bajo el criterio de transparencia activa. Los sujetos obligados deben proveer activamente toda la información pública aun cuando no haya pedidos concretos de esa información.

En términos generales, no podemos olvidar que este Congreso ha tenido un rol central en la discusión en todas las instancias que se desarrollaron: la presentación del secretario de Asuntos Políticos e Institucionales, las reuniones de comisión, las reuniones de asesores, la audiencia pública celebrada el pasado 19 de abril, entre otras. En esta última, se escucharon las recomendaciones y las críticas de las ONG que hace años trabajan arduamente y con mucho compromiso en pos de lograr instalar el debate y que luego se sancione la mejor ley posible. En ese sentido, puede decirse que el proyecto enviado por el PEN ha sido discutido y enriquecido tanto con los aportes de los demás proyectos presentados por legisladores de los distintos bloques parlamentarios como con las propuestas de las diversas organizaciones de la sociedad civil, especialistas y demás actores que participaron de la discusión.

No obstante, por supuesto que este proyecto -como todos- es perfectible o susceptible de mejoras. Algunas de ellas se han mencionado a lo largo del debate. Precisamente porque nuestro deber como legisladores es apuntar siempre a la mejor ley posible, no podemos eludirse lo que constituye el punto clave para su aplicación exitosa: la Agencia de Acceso a la Información Pública -AAIP-, su órgano de aplicación.

Todos estamos de acuerdo con que debería ser un órgano plural, autónomo e independiente, con facultades amplias y adecuadamente financiadas. No obstante, lo que vemos en este proyecto es que persisten algunos problemas al respecto, especialmente en lo que concierne a la elección y remoción de su director. Si bien es cierto que se incorpora la participación ciudadana para la selección y la participación legislativa para la remoción, creemos que el formato que se les ha dado resulta insuficiente. El resultado de ello es que no se reduce acabadamente la discrecionalidad en la selección y remoción de las autoridades que aplicarán la ley, porque se pone en cabeza del órgano controlado -el PEN- la facultad de elegir y remover al director del órgano que debe controlarlo -la AAIP.

En este punto, creemos que la propuesta de la Ley Modelo de la OEA es la deseable porque garantizaría la absoluta independencia de un órgano garante. Órgano que, cabe



#### Dirección de Información Parlamentaria

recordar, en esa Ley Modelo es colegiado y actúa como control de todos los sujetos obligados. En sintonía con ello, las propuestas de las organizaciones de la sociedad civil deberían inspirar modificaciones en el proyecto, especialmente en lo que concierne a la incorporación de un concurso público de oposición y antecedentes para la designación, o de alguna forma de participación legislativa decisoria en la designación y remoción. Estos elementos -concurso y participación legislativa- asegurarían no solo la independencia del órgano sino además dos condiciones básicas que debe tener el organismo: idoneidad y legitimidad.

En ese sentido, consideramos que una eventual modificación del artículo 27 que permitiera que el dictamen de la Comisión Bicameral fuera vinculante para la remoción, constituiría una mejora relevante aunque no suficiente, en especial cuando se tiene en cuenta la composición de dicha Comisión Bicameral, presidida por el presidente del Senado e integrada por los presidentes de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Derechos y Garantías de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación y las de Asuntos Constitucionales y de Libertad de Expresión de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. A simple vista puede observarse que ésta no se integrará respetando la composición de las Cámaras y que, por lo tanto, continuará teniendo una presencia significativamente mayor del Poder Ejecutivo nacional. Por eso es que, si bien esta modificación sería un importante avance, creemos que no resolvería acabadamente el problema.

Sumado a esto, el articulado del proyecto se remite sólo al órgano de aplicación del Ejecutivo. Sólo en el artículo 28 se establece que el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Consejo de la Magistratura y los Ministerios Públicos crearán un organismo autónomo con competencias semejantes a los de la AAIP, pero sin las precisiones que creemos necesarias y supeditando su creación y formato a un acto de cada poder. Otro de los puntos que creemos que deben reevaluarse del proyecto, si lo que se quiere es garantizar la efectiva aplicación de la ley, es el que corresponde al régimen de excepciones.

En este tema en particular, partimos de los principios de transparencia activa y de máxima divulgación que suponen que toda la información debe estar publicada, por lo que los pedidos de información particular deberían ser la excepción y no la regla. Sin embargo, toda ley que reglamenta el acceso a la información pública prevé ciertas excepciones que limitan el acceso y permiten a algunas instituciones no revelar cierto tipo de información.

Así es que se acuerda con que hay cierta información que debe ser reservada o clasificada, generalmente relacionada con la seguridad nacional, la defensa o las relaciones internacionales, las causas judiciales en curso, y el derecho a la privacidad individual y a la confidencialidad comercial o industrial. A pesar de estos consensos, siempre ha existido una gran disputa en torno a la definición de esa lista de excepciones. Estas excepciones, entonces, deben desarrollarse teniendo en cuenta el principio de máxima divulgación de la información pública como criterio rector; incluso resultaría aconsejable que la propia ley estableciera cuáles son los requisitos formales que debe reunir el acto denegatorio frente a un pedido de acceso a la información.

En este sentido, puede decirse que el proyecto que hoy tratamos -aunque con algunas mejoras- tiene un régimen de excepciones casi idéntico al del decreto actualmente vigente. Por lo tanto, le caben las mismas críticas: es un régimen de excepciones que





## Dirección de Información Parlamentaria

contiene supuestos cuestionables y un lenguaje que continúa siendo ambiguo. Es necesario recordar que las excepciones imprecisas o el lenguaje genérico permiten interpretaciones amplias que favorecen la arbitrariedad y la discrecionalidad; por ejemplo, frases tales como “que afecte el interés” y “poner en peligro el correcto funcionamiento”, entre otras. En síntesis, un esquema semejante podría minar los loables objetivos que tiene este proyecto.

Pero más allá de los elementos que consideramos que constituyen las grandes virtudes y los grandes defectos de este proyecto de ley, podemos mencionar una serie de observaciones que desde nuestro bloque consideramos que mejorarían sustancialmente la ley.

El primero de ellos tiene que ver con el principio de gratuidad. Al respecto, el dictamen de mayoría que estamos tratando señala que los costos de reproducción de la información corren por cuenta del solicitante. La Ley Modelo de la OEA es muy clara en su propuesta sobre este punto al afirmar que: “El costo de reproducción no podrá exceder el valor del material en el que se reprodujo la información solicitada; el costo del envío no deberá exceder el costo que éste pudiera tener en el mercado. Las autoridades públicas podrán entregar la información de forma totalmente gratuita, incluyendo costos de reproducción y envío, para cualquier ciudadano que tenga ingresos anuales menores a una cantidad establecida por la Comisión de Información.” En línea con esto, consideramos que podrían incorporarse algunas de estas propuestas, de forma tal que aun cuando el Estado le cobre al peticionario los costos de reproducción, estos valores no superen los costos reales de reproducción que la información requerida tiene para el Estado. A esto deberían sumarse consideraciones especiales cuando el solicitante de la información sea una ONG o un ciudadano que se encuentre en una situación económica desventajosa. Estas observaciones tienen el objetivo de no permitir que factores económicos constituyan barreras para el acceso a la información.

En segundo lugar, consideramos que podría incluirse la posibilidad del anonimato. En el proyecto en cuestión el artículo 9° prevé que las solicitudes de acceso a la información deberán consignar identidad del peticionario, así como datos de contacto. El pedido de identificación personal nos parece innecesario y no vemos razón alguna por la que la información no pueda solicitarse bajo el anonimato. Esto también está previsto en la Ley Modelo de la OEA, donde se afirma: “Toda persona que solicite información a cualquier autoridad pública que esté comprendida por la presente ley tendrá los siguientes derechos...” De acuerdo con el artículo 5°, inciso d): “a realizar solicitudes de información en forma anónima”, de la misma manera que en varios de los proyectos encabezados por diversas fuerzas políticas.

La cuestión del anonimato resulta aún más factible teniendo en cuenta el hecho de que se dispone de una constancia de trámite cuando se solicita información y que permitiría el seguimiento por parte del solicitante. Asimismo, esa es una cuestión que también debería precisarse en el articulado del proyecto, ya que no hay especificaciones acerca de este punto. A riesgo de sonar repetitiva, es necesario señalar que este punto también está contemplado en la Ley Modelo de la OEA en el artículo 20, donde se lee: “...se le deberá asignar un número para su debido seguimiento, el cual deberá ser proporcionado al solicitante junto con la información de contacto del Oficial de Información encargado de procesar esta solicitud.”

En tercer lugar, consideramos necesario dar el debate por el establecimiento de un plazo



## Dirección de Información Parlamentaria

máximo para la desclasificación de la información. Esto no solo se encuentra en la Ley Modelo de la OEA -un plazo de doce años que pueden ser prorrogables por otros doce con autorización de la Comisión de Información- sino que también está incluido en la mayoría de los proyectos presentados por otros colegas.

Tampoco es una cuestión exclusivamente de plazos -aunque este punto es crucial, sin lugar a dudas- sino también de los requisitos para la determinación de cierta información como reservada, de establecer quién puede declarar cierta información como clasificada o reservada, de cuáles son los instrumentos legales que pueden declararla y del acceso del público a la información actualmente reservada. Sumado a esto, creemos que las expresiones correctas para referirse a esta información son las de “reservada” o “confidencial” y que, por lo tanto, el proyecto debe definir el término de “información secreta” o más bien eliminarlo para evitar arbitrariedades en su interpretación.

En cuarto lugar, lamentamos la ausencia de un régimen sancionatorio específico para los casos en los que los funcionarios públicos impidan de modo ilegítimo el acceso de ciudadanos y ciudadanas a la información pública. Creemos que esto generaría un sistema de responsabilidades -y no solo administrativas-, que fortalecería la eficacia de la ley.

Una quinta consideración consiste en la propuesta de incluir la posibilidad de la petición de información de forma verbal u oral, ya sea en persona o por vía telefónica. Esto garantizaría que todo ciudadano pueda solicitar información sin barreras con referencia al nivel educativo o de alfabetismo. Al respecto, la Ley Modelo de la OEA establece: “La solicitud de información puede ser presentada por medio escrito, por vía electrónica, verbalmente en persona, por teléfono o por cualquier otro medio análogo...” En relación con esta intencionalidad de máxima divulgación y de mínima formalidad es que también consideramos que los reclamos que eventualmente se eleven ante el órgano de aplicación puedan ser presentados no solo en forma escrita sino también por vía electrónica, a elección del solicitante.

Otro conjunto de observaciones constituye más bien un pedido de mayor precisión. En primer lugar, sobre los mecanismos para solicitar información, con el fin de evitar discrecionalidades al momento de la respuesta. Creemos que esto es necesario, más allá de la enunciación del principio de informalidad, para realmente asegurarnos de que el órgano solicitado no pueda negar la información aludiendo una supuesta inadecuación del formato del pedido. En segundo lugar, de los requisitos que debe reunir una respuesta denegatoria. El acto que declara la reserva tiene que reunir las características propias de un acto administrativo con invocación de motivos concretos. Un sujeto obligado no puede simplemente decir “no te doy la información que pedís porque está dentro de tal excepción”, sino que debe fundamentarse con argumentos precisos, estando éstos sujetos a una posterior evaluación por parte del órgano de control o garante. De esta manera, el peso de la fundamentación recae sobre el que deniega la información y no sobre el que la solicita. Esto implicaría una verdadera concreción del principio de legitimación activa: no es el ciudadano el que debe explicar los motivos de la solicitud sino el funcionario quien que debe fundamentar su denegatoria, como mencionamos anteriormente.

Por otro lado, en relación al formato de la información suministrada, creemos que ésta debería ser provista en formatos digitales para poder permitir un mejor manejo y



#### Dirección de Información Parlamentaria

tratamiento de la información. Una opción a considerar podría ser que el solicitante exprese su preferencia respecto del formato de entrega de la información -como lo establece la Ley Modelo de la OEA en su artículo 23, inciso d)- salvo en ocasiones en las que esto fuera de imposible cumplimiento o significara un esfuerzo estatal desmedido.

Con respecto a las obligaciones del Estado en materia de transparencia activa, celebramos su inclusión y amplitud, pero creemos que puede mejorarse en los siguientes aspectos: a) incorporar la posibilidad de la ampliación de la lista de información que debe publicarse en las páginas web de acuerdo con lo que establezca la AAIP o los órganos que cumplan sus funciones en los otros poderes; b) desarrollar un esquema de publicación para cada organismo con plazos establecidos y formulados por la autoridad de aplicación; c) incluir criterios claros para asegurar la accesibilidad de la información publicada; d) incorporar como información a publicar una lista completa de los subsidios otorgados por la autoridad pública (Ley Modelo de la OEA, artículo 11, inciso x); e) incluir el deber de los sujetos obligados de llevar adelante una digitalización progresiva de la información en su poder; f) incorporar como información a publicar una lista completa de los pedidos de información recibidos y sus resultados.

Como octava recomendación, creemos que deben incorporarse mayores detalles sobre las cualificaciones, la experiencia y la trayectoria de quien será el director de la AAIP. Esto parece necesario para asegurarnos que cuente con probada experiencia y trayectoria profesional en materia de acceso a la información pública, así como también un fuerte compromiso con la temática y con los valores democráticos. Un mecanismo que podría utilizarse para asegurarlo es el concurso público de oposición de antecedentes, como ya mencionamos.

Otro punto a tener en cuenta es el tema de los plazos. Por un lado, el plazo de entrega de información, que se amplía en comparación con el decreto actualmente vigente: el proyecto establece un plazo de quince días hábiles mientras que en el decreto son diez días hábiles. Sumado a esto, no se especifican de forma acabada las razones para el pedido de prórroga, por lo que existe la posibilidad de que el recurso sea utilizado como regla más que como excepción. Por otro lado, el plazo de puesta en vigencia de la ley nos parece demasiado largo, siendo de un año cuando otros proyectos proponen de tres a seis meses.

Finalmente, un conjunto de recomendaciones tienen que ver con el almacenamiento y la producción de información. Sabemos que la obligación recae sobre la información que existe -o que el ente alcanzado esté legalmente obligado a producir-, pero el proyecto no realiza ningún avance sobre la producción de información. Sumado a esto, no establece la obligación de archivar o conservar la información: de esta manera, puede no proveerse arguyendo que no existe, o incluso destruirse para no ser suministrada. En este sentido, la Ley Modelo de la OEA propone incluir prácticas en relación con el mantenimiento, archivo y eliminación de los documentos en su artículo 30, inciso a). En íntima relación con este punto, el proyecto no incluye referencias acerca de estándares de calidad de la información pública -cuestión central si tenemos en cuenta las diferencias en las capacidades de cada organismo y la importancia de la comparabilidad de la información- y sobre su accesibilidad para el público no especializado.



#### Dirección de Información Parlamentaria

En definitiva, si realmente queremos afirmar la justicia y la transparencia de las actuaciones estatales, debemos no solo remover los obstáculos políticos, sociales y jurídicos sino también los culturales. No se trata de otorgar un derecho sino de reconocerlo; no se trata de un buen gobierno que accede a proveer información sino de respetar un derecho humano. No somos buenos funcionarios porque accedemos a proveer información. No lo somos simplemente porque esa información no nos pertenece.

Ese es el camino que esta ley nos señala, el de un cambio de paradigma hacia una concepción pública de la información. Sin dudas, será un recorrido largo porque implica un cambio en la forma de comprender la naturaleza misma de la información pública, pero hacia allí nos dirigimos.

Dejemos a un lado la idea del secreto y la tradición oscurantista del Estado y optemos por acrecentar siempre la visibilidad de lo público sobre todo lo que hacemos y decidimos como gobernantes, representantes o funcionarios. Parafraseando a Hannah Arendt, tengamos el coraje de salir a lo público, porque solo cuando nos sometemos a la luz pública y nos encontramos con nuestros iguales es que podemos ser realmente libres.

Por todo lo enunciado, con las observaciones hechas, es que acompañaremos este proyecto de ley con nuestro voto.

## **19. INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO COSTA**

### **Derecho de acceso a la información pública**

Respecto de la ley que estamos debatiendo hoy, tenemos que decir que es un adelanto de la democracia y, fundamentalmente, una reparación histórica. Es una deuda pendiente que tiene la Argentina. Nos debíamos una ley como ésta para esclarecer los actos de gobierno, la publicidad de esos actos y, por supuesto, el derecho al acceso de la información pública por parte de los ciudadanos.

Tiene que ver en principio con la necesidad de cumplir con el derecho interno y con el derecho externo; resultará un adelanto muy significativo respecto del Decreto 1.172/2003.

En primer término, cumplir con la obligación que deriva de los artículos 1º, 33 y 38 de la Constitución Nacional. Y en segundo lugar, con los tratados con jerarquía constitucional establecidos en el inciso 22 del artículo 75 de nuestra Carta Magna. Sin acceso a la información no hay democracia plena. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que “una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre”. La comisión reafirma los conceptos vertidos en el Informe sobre Terrorismo y Derechos Humanos, donde sostiene que el Estado tiene la obligación de adoptar las disposiciones legislativas o de otro carácter que fueran necesarias para asegurar el reconocimiento y la aplicación efectiva de ese derecho.

En el mismo sentido se expresa la Convención Americana sobre Derechos Humanos al



## Dirección de Información Parlamentaria

establecer que “toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole”.

La resolución 2.252 de la Asamblea General de la OEA insta a los Estados a que respeten el acceso de dicha información a todas las personas. Se trata de un “medio” o “instrumento” apto para alcanzar un eficaz y adecuado ejercicio de los derechos civiles, políticos, sociales y económicos.

En un reciente fallo de los tribunales de la provincia de Santa Cruz se recoge jurisprudencia de la Corte Suprema, en la cual se cita lo siguiente: “Asimismo en las Recomendaciones sobre Acceso a la Información elaboradas por la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos del Consejo Permanente de la OEA se señala que los Estados deben establecer un procedimiento claro, simple y sin costo -en la medida de lo posible- mediante el cual las personas pueden solicitar información”. A tales efectos recomienda que se aceptan “solicitudes de información sin que el solicitante deba probar un interés personal, relación con la información o justificación para la solicitud”, con lo cual queda clara la necesidad de la sanción de esta ley.

Esta ley servirá como antídoto contra la corrupción. Esta ley promueve la transparencia porque permitirá saber rápidamente cuándo algún funcionario no está cumpliendo con su deber o hay indicios de malversación de fondos públicos. Nos va a servir para que la sociedad nos ayude en el rol que nos toca a los legisladores respecto del control del Poder Ejecutivo. Toda persona tendrá acceso a la información y, por lo tanto, se podrán dilucidar diversas cuestiones que hasta hoy quedaban de lado.

En estos últimos años ciertamente se llevó adelante un saqueo de los recursos del Estado Nacional y de algunos Estados provinciales.

Si nadie podía conocer lo que hacía el gobierno no podían controlarlo y si no podían controlarlo ellos serían libres de manejar los fondos públicos como si fueran propios. Vengo de una provincia donde se ha violado sistemáticamente el derecho humano del acceso a la información pública.

Mientras el actual gobierno nacional en tan sólo seis meses envió este proyecto, en Santa Cruz se negaron durante veinte años a tratar iniciativas similares que presentó mi partido para garantizar el libre acceso a la información pública. Seis veces presentamos proyectos de ley que buscaban garantizar el libre acceso a la información pública y seis veces el kirchnerismo impidió el tratamiento de esas iniciativas. Lo hicimos en 1997, en 1999, en 2003, en 2006, en 2010, en 2013 y lo seguimos haciendo este año, en el que el bloque Unión para Vivir Mejor volvió a presentar un nuevo proyecto al respecto.

El 10 de Mayo del corriente año tuvimos que judicializar el asunto, presentando un recurso de amparo –se trata del expediente R-17.337/16- para acceder a información que debería ser pública, porque es un derecho del pueblo, pero que en Santa Cruz nos es negado.

Así es como manejan los números en mi provincia, como si se tratase de un gobierno totalitario. Se comportan antidemocráticamente, ocultándole a los santacruceños y a la República entera los resultados del desgobernio de treinta años.

En Santa Cruz la información es secreta. Para el kirchnerismo el acceso a la información pública no existe; no brinda ningún tipo de información sobre los gastos públicos.

Recién con las nuevas autoridades de Vialidad Nacional pudimos tener acceso al





#### Dirección de Información Parlamentaria

número final que recibió Austral Construcciones por obras que nunca se terminaron pero que fueron cobradas, con sobreprecios del 400 por ciento. Firmaron convenios con Vialidad Nacional y el Ministerio de Planificación sin ningún control. Así pudieron adjudicarle el 80 por ciento de las obras públicas a Lázaro Báez, por un monto de 16.000 millones de pesos, de los cuales cobró 12.000 millones de pesos y solo ejecutó obras por 4.000 millones.

Pudieron establecer un circuito que permitía los sobreprecios y hacía que ellos cobraran por adelantado las obras que, después, eran abandonadas sin terminar y nadie tenía datos para auditarlos. Esto no hubiera pasado si el Poder Ejecutivo nos hubiese permitido el acceso a la información como corresponde; hubiéramos podido darnos cuenta de la gravedad de latrocinio con elementos fehacientes para que la Justicia actuara más rápido. Pero como eso no sucedió, aparecieron los bolsos con millones de dólares de retornos, las cuentas en Suiza y los testaferros.

Así se quedaron con la obra pública, con el petróleo, con los ahorros de los santacruceños –mil millones de pesos- y con todas las estancias sobre el río Santa Cruz...

Este es el costo social de la corrupción que debemos pagar en mi provincia, donde el 40 por ciento de las escuelas no abren por problemas de infraestructura, donde en Zona Norte no hay agua y donde el 50 por ciento de la gente está en la calle reclamando por el pago de los salarios que les corresponde.

Con los miles de millones que se le entregaron a Lázaro Báez se podrían haber otorgado veinte mil créditos para viviendas, dando solución al déficit habitacional, y al mismo tiempo proporcionando trabajo permanente a veinte mil personas. O bien, se podrían haber construido doscientos núcleos educativos y recreativos, como por ejemplo jardines de infantes y escuelas primarias, secundarias y técnicas.

El pueblo de Santa Cruz nunca supo qué pasó con esos fondos. Jamás rindieron cuentas de su gestión, ni presentaron balances, ni documentos, ni registros oficiales.

Esto es lo que obtuvimos: una sociedad injusta, inequitativa, donde no hay igualdad de oportunidades y los amigos del poder se quedan con todo.

Nosotros no queremos un gobierno para los ricos, sino para el pueblo.

Porque en mi provincia conocemos muy bien lo que son las consecuencias sociales de un gobierno que niega sistemáticamente la información de su gestión para que el pueblo no controle, quiero destacar la importancia de este proyecto de ley para comenzar un nuevo camino de transparencia y decir “Nunca más” a la corrupción.

## **29. INSERCIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA DIPUTADA MENDOZA (M.S.)**

### **Derecho de Acceso a la Información Pública.**

El acceso a la información pública debe ser garantizado por ley. Como dice nuestra Constitución Nacional, es obligación del Estado dar publicidad a los actos y decisiones de gobierno para que la sociedad evalúe, a través del sufragio, las peticiones o incluso acciones judiciales.



## Dirección de Información Parlamentaria

La regulación de este derecho debe permitir una mayor participación de todas las personas en los asuntos de interés público, y esto solo se puede lograr si se garantiza el acceso a toda información cuyo contenido sea de interés general, es decir, sea de utilidad para el logro del bien común. En este sentido, la información de carácter público no está exclusivamente constituida por la administrada por el Estado sino que también debe reputarse como pública aquella información relacionada con actividades que interesen a toda la comunidad para viabilizar y dar operatividad a derechos consagrados por nuestra Constitución.

Respecto al proyecto del Poder Ejecutivo, hay cuestiones de definición que son perfectibles. Deberían incluirse entidades privadas con o sin fines de lucro, y aquellas que tengan un fin público o que posean información pública de interés. Asimismo, a las empresas sociedades del Estado, las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, las sociedades de economía mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado nacional tenga participación en el capital accionario o participación en la formación de decisiones societarias (inciso g, del artículo 7°). Ambas propuestas están planteadas en pos de generar mayor participación.

Debemos ser específicos en los casos de denominados excepción. Para eso la ciudadanía debe saber a qué se refiere el proyecto cuando establece información “reservada” o “clasificada”. De lo contrario, corremos el peligro de mantener el actual esquema por la vía de la excepción reservada, con lo cual cabe preguntarse si este proyecto de ley será, entonces, solo una acción declarativa. Esperemos que no lo sea porque la expectativa es grande cuando la mayoría del Congreso acompaña una iniciativa, como lo es este proyecto.

En cuanto a la aplicación, quiero hacer un párrafo aparte. Este nuevo gobierno conducido por Macri es el responsable de derogar una ley con treinta años de discusión, como fue la ley de servicios de comunicación audiovisual, y es llamativo que se pretenda pasar por el Congreso una ley de acceso a la información pública. Por eso, este proyecto debe ser revisado en detalle; todos los ojos estarán en la autoridad de aplicación. Este gobierno, paladín de la lucha contra la corrupción, carga con funcionarios investigados en todo el mundo por la apertura de cuentas off shore en el exterior, en una mega investigación mundialmente conocida como Panama papers.

¿Qué desempeño podemos esperar de la autoridad directamente asignada por el presidente de la Nación? ¿Qué garantías de aplicación tendremos en la Agencia de Acceso a la Información Pública cuyo titular sea designado y removido por el Poder Ejecutivo Nacional? Sería adecuado un llamado a concurso público, sujeto a aprobación y evaluación de este órgano legislativo, a través de la comisión bicameral correspondiente.

Celebramos que después de años de intentarlo, finalmente esta Cámara haya podido encontrar una alternativa que permita discutir y aprobar una ley de estas características. La regulación de este derecho busca como fin la transparencia de la administración pública.

El decreto 1172/2003, firmado por el entonces presidente doctor Néstor Carlos Kirchner, regula el acceso a la información pública a todas las personas sin distinción. También genera cinco reglamentos y una disposición: el acceso a la información pública, audiencias públicas, elaboración participativa de normas, publicidad de la gestión de intereses, reuniones abiertas de los entes reguladores de servicios públicos y



#### Dirección de Información Parlamentaria

la gratuidad del Boletín Oficial del día en internet.

Si la intención política del actual gobierno es contraponer un modelo de transparencia contra un supuesto modelo de corrupción, deben saber a esta altura que están yendo en el camino incorrecto. La entonces presidenta doctora Cristina Fernández de Kirchner, no tiene cuentas en el exterior como sí las tienen funcionarios de la alianza Cambiemos. A seis meses de gestión, vemos día a día operaciones de prensa intentando buscar casos de corrupción en el gobierno anterior, desmentidos una y otra vez por la Justicia, excepto por los ya conocidos procedimientos de los magistrados pistoleros. Celebramos la iniciativa al debate a otra deuda de la democracia. Aunque la gente en la calle no me pregunta por la información pública; me pregunta cuándo se va a aprobar la ley que frena los despidos, cuándo se convocan las paritarias, cuándo va a poder volver a ahorrar, cuándo podrá irse un fin de semana largo a disfrutar en familia o qué estamos haciendo para crear puestos de trabajo, para fomentar la apertura de fábricas y el crecimiento de la industria nacional.

## **32. INSERCIÓN SOLITADA POR LA DIPUTADA MOLINA**

### **Derecho de Acceso a la Información Pública.**

Señor presidente: quiero expresar mi desacuerdo con esta ley, porque no hay una emergencia ocupacional; porque es un cepo al trabajo; quedó claro el concepto de esta ley por el informe completo que expuso el equipo de trabajo de la Nación cuando asistieron al plenario de comisiones. En esta oportunidad también asistieron las distintas organizaciones que nuclean las pymes de todo el país; a todos se les escuchó, señor presidente, y todos coincidieron, excepto una sola organización, en que esta ley a quien más perjudicaba era a las mismas pymes. Ante este panorama de angustia de quienes representan el 80 por ciento de la economía nacional, qué duda podemos tener, cuando fueron ellos mismos los que por favor pidieron no apoyar esta ley, e incluso se los veía en la calles repartiendo folletos con este pedido. Estamos convencidos de que los cepos no sirven para resolver los problemas sino que los agravan, y sería muy razonable que el presidente no permita que una mala ley, como ésta, genere un efecto muy nocivo en el mercado laboral. A él, le preocupa generar empleo y este como cualquier cepo solo lo va a destruir, sobre todo, en el sector informal que es el más débil y va a retrasar la generación de nuevos puestos de trabajo; el presidente va a hacer lo que considere mejor para cuidar a todos los argentinos y ayudarlos a crecer de verdad.

## **39. INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO SAN MARTÍN**

### **Derecho de Acceso a la Información Pública.**



#### Dirección de Información Parlamentaria

Tal como se ha indicado a través de las distintas exposiciones, la información pública es un derecho, y en claro debe quedar que también es una obligación de todos aquellos que forman parte de la administración de la República. La democracia es el gobierno del pueblo, y lo hace a través de sus representantes; estos representantes son elegidos por el voto del pueblo. Por lo tanto, no solo deben cumplir con sus cargos conforme a lo establecido en la Constitución Nacional y las leyes que de ella surgen. La información de la administración indudablemente es pública; esta ley solo reglamenta la forma de administrarla, restringiendo solo los casos especiales que aquí se han mencionado, siendo esta restricción especial y temporal. Los medios actuales de informatización de la administración hacen posible que esta información pública esté disponible rápidamente, más cuando ella este acotada; esta ley permitirá que quien la solicite la disponga inmediatamente.

No existe motivo para que, con la tecnología actual, la información no esté disponible al público en cada una de las estructuras administrativas que cuentan con páginas de acceso público; es además la mejor forma de transparentar la administración. Creo que el hecho de sancionar una ley para el acceso a la información pública reafirma el derecho de los ciudadanos y la obligación de sus representantes de mantener informado al pueblo.

## 42. INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO SANTILLÁN

### **Derecho de Acceso a la información pública**

Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. Hoy estamos ante una ley que tiene por objeto garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública, promover la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública. Estamos ante un derecho fundamental protegido por nuestra Constitución Nacional, no solo por estar garantizado en los artículos 14 y 33 sino que además este derecho está regulado con mayor fuerza a través del artículo 75 inciso 22, que incorpora rangos constitucionales a diversos tratados internacionales que contienen disposiciones expresas sobre este derecho fundamental; éste es reconocido como un derecho humano fundamental.

El acceso a la información pública, derecho humano fundamental como dijimos precedentemente, se constituye como un pilar del sistema democrático de gobierno y del Estado de derecho en el que vivimos, y esto es así porque este acceso, en uno de sus tantos fines, permite a las personas poder acceder a la información pública y veraz, y así poder participar de la vida democrática de éste.

Sin embargo, considero que no debemos confundir información pública con información en poder del Estado, ya que el mantenimiento del sistema democrático no se agota en el mero conocimiento por parte de los particulares de la información que manejan o poseen los órganos por parte de éste, a fin de controlarlos en sus funciones,

#### Dirección de Información Parlamentaria

ya que la toma de decisiones o la realización de actos por lo general depende de la conjunción de múltiples factores, y muchas veces esta situación excede el mero ámbito de gobierno.

Por ello, considero que cuando hablamos de información pública debemos tener en cuenta el real concepto de lo que por ese término entendemos y centrar la atención no en el poseedor de la información sino en la naturaleza de la información que se requiere, ya que los sujetos privados pueden tener información que tenga relevancia e interés público y entonces se pueden convertir en objetos obligados por la ley.

Es por eso que considero que la información de carácter público no está exclusivamente constituida o administrada por el Estado, sino que también debe reputarse como pública a toda aquella información relacionada con actividades que interesen a toda la comunidad para viabilizar y dar operatividad a derechos consagrados por nuestra Constitución. Es pública la información en manos de los órganos y poderes del Estado y aquella que se genere con fondos públicos o a partir de la concesión, explotación, delegación o autorización de funciones, servicios o bienes públicos.

La definición y alcance de la información pública es esencial para el adecuado ejercicio y garantía del derecho. Por lo tanto, una ley debe ser clara respecto de qué constituye información pública y sobre qué datos existe la obligación de garantizar su accesibilidad.

Otra cuestión que me gustaría resaltar es lo que establece el proyecto cuando se refiere como sujeto obligado a las empresas y sociedades del Estado que abarcan a las empresas del Estado, las sociedades del Estado, las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, las sociedades de economía mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado nacional tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias. Acá nos topamos con una limitación al derecho de acceso a la información pública, porque en el supuesto de que las empresas cuenten con participación estatal pero las acciones del Estado no las alcancen, se vean exentas de hacer pública la información que por este proyecto se garantiza.

Por los motivos expuestos, acompaño este proyecto, ya que es un derecho fundamental para el Estado democrático en el que vivimos, con las consideraciones expuestas.

## **45. INSERCIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA DIPUTADA SCAGLIA**

### **Derecho de Acceso a la Información Pública**

En el día de hoy nos encontramos dando tratamiento al proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo de la Nación mediante el mensaje 08-2016. Como todos saben, esta propuesta cumple acabadamente con los estándares internacionales en materia de legislación y, además, propone importantes avances en materia tecnológica.

Así, en lo que respecta a la legislación internacional, reconoce los principios adoptados





## Dirección de Información Parlamentaria

en 1789 por la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que en su artículo 14 expresa: “Los ciudadanos tienen el derecho de comprobar, por sí mismos o a través de sus representantes, la necesidad de la contribución pública, de aceptarla libremente, de vigilar su empleo y de determinar su prorrata, su base, su recaudación y su duración”.

También reconoce lo prescripto en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 19, inciso 2), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en materia de lo que se ha dado en llamar el “derecho a la información”, consistente en un derecho amplio en función de las etapas del proceso de comunicación, como es el derecho a recibir la información y difundirla.

Asimismo, se da expreso cumplimiento al Pacto de San José de Costa Rica, o Convención Americana de Derechos Humanos, que en su artículo 13, inciso 1), establece: “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideraciones de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa artística o por cualquier otro procedimiento de su elección”.

En el orden interno, estamos cumplimentando el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa CIPPEC contra Ministerio de Desarrollo Social, del año 2013, en la que se solicita a este cuerpo legislativo la pronta sanción de una ley de acceso a la información pública.

Así, esta ley permite consagrar un esquema legal amplio y suficiente de control de acceso a la información pública gracias a los instrumentos jurídicos que se ponen a disposición de todas las personas. De este modo, podrán requerir el acceso por medios informáticos y reclamar ante el incumplimiento de un funcionario no sólo por vía del recurso administrativo sino también por la vía del amparo ante la Justicia.

Cabe señalar que se establecieron excepciones precisas, disminuyendo toda posibilidad de discrecionalidad a los responsables de acceso a la información. En este sentido, se dispone la generación de órganos –agencias en cada Poder del Estado para impulsar la apertura informativa de toda la administración nacional y en conjunto con las provincias para todo el Estado Argentino.

Sabemos que la publicidad de los actos de gobierno se relaciona con las características de la República. Por esto, de ahora en más, en la Argentina el derecho a conocer las decisiones públicas constituye la regla general, mientras que la información reservada será la excepción.

Por lo tanto, este proyecto vuelve operativo el principio constitucional de que la publicidad es una vía de control de los actos de gobierno para garantizar a los administrados el correcto ejercicio de la función pública.

Hasta hace algunos años las circunstancias tecnológicas, de doctrina o consenso social, no permitían que la publicidad llegase hasta los niveles de información desagregada o con el nivel de precisión que hoy se pueden alcanzar y socializar. Por eso, esta propuesta establece la transparencia activa como responsabilidad de gestión del gobierno.

La información pública como un componente de la publicidad de los actos de gobierno se torna hoy un imperativo a cumplir gracias al avance tecnológico. Por ello, la norma respeta este mandato de época y deja en claro que el gobierno nacional está dispuesto a consagrar e implantar definitivamente la transparencia en la gestión pública, combatir la



#### Dirección de Información Parlamentaria

corrupción y la cultura del secreto como práctica naturalizada, implantar la eficiencia y eficacia en el manejo de la labor pública y garantizar la participación ciudadana en la forma de decisiones de interés público como valores comunes a todos. Por todo esto, en el día de la fecha y en este recinto, nos encontramos dando el primer paso y la discusión necesaria para alcanzar los más amplios apoyos de los partidos de la oposición. Es un gran paso para la consagración de una nueva relación en la República Argentina entre administrados y administradores.

## 49. INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO SOLANAS

### Derecho de Acceso a la Información Pública

El derecho de acceso a la información pública es una consecuencia del sistema republicano de gobierno y es, por ello, un derecho político. Naturalmente, entonces, consideramos que el legitimado como sujeto activo es el sujeto político, que es el ciudadano.

En razón de ello, la publicidad es una vía de control de los actos de gobierno para garantizar a los administrados el correcto ejercicio de la función pública de quienes han asumido la responsabilidad de desempeñar tal tarea.

En consecuencia, los gobernantes, que actúan por delegación de los ciudadanos, ¿podrían, en este marco, privar de alguna información a sus titulares?

En una república democrática el derecho a saber de las cosas públicas constituye la regla general, y la información reservada, la excepción.

Por ello, todos los ciudadanos, sin excepción, tienen derecho a todo tipo de información que esté en poder de entidades públicas y de las privadas que ejerzan funciones públicas o reciban fondos del Estado.

Así, en diversos tratados internacionales encontramos referencias al derecho a la información: en la Declaración Universal de Derechos Humanos (art.19), en el artículo 19, inciso 2°, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y en el art. 13, inc. 1°, de la Convención sobre los Derechos del Niño.

De igual manera, también en el ámbito americano encontramos consagrado el derecho a la información. Es el caso del Pacto de San José de Costa Rica, o Convención Americana de Derechos Humanos, ratificado por nuestro país en 1984, que establece en su artículo 13, inciso 1°, lo siguiente: “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideraciones de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”

En cuanto a nuestro ordenamiento jurídico, la norma específica es el decreto N°1172/2003, que fuera dictado a poco de asumir por el presidente Néstor Kirchner, que incluye diversos reglamentos generales: a) de audiencias públicas para el Poder Ejecutivo nacional, b) de publicidad para la gestión de interés (lobby), c) de elaboración

#### Dirección de Información Parlamentaria

participativa de normas, d) de acceso a la información pública para el Poder Ejecutivo nacional, y e) de reuniones abiertas de los entes reguladores de los servicios públicos. A su vez, este decreto establece el acceso libre y gratuito, vía Internet, a la edición diaria de la totalidad de las secciones del Boletín Oficial durante el día de su publicación.

Cabe referir que específicamente, el reglamento general de acceso a la información pública para el Poder Ejecutivo nacional prevé que aquél es de aplicación en el ámbito de los organismos, entidades, empresas, sociedades, dependencias, y de todo otro ente que funcione bajo la jurisdicción del Poder Ejecutivo nacional.

Cabe asimismo señalar que es aplicable a las organizaciones privadas a las que se hayan otorgado subsidios o aportes provenientes del sector público nacional, así como a las instituciones o fondos cuya administración, guarda o conservación esté a cargo del Estado nacional a través de sus jurisdicciones o entidades, y a las empresas privadas a las que se les haya otorgado mediante permiso, licencia, concesión o cualquier otra forma contractual, la prestación de un servicio público o la explotación de un bien de dominio público (artículo 2°).

En razón de lo expresado, y teniendo en cuenta la normativa vigente, este proyecto nos merece las siguientes observaciones.

Se ha previsto la constitución de la Agencia de Acceso a la Información Pública, la cual estará a cargo de un director que durará en sus funciones cinco años en el cargo con posibilidad de ser reelegido por una única vez, siendo este funcionario designado por el propio Poder Ejecutivo nacional.

Esta situación resulta a todas luces cuestionable, atento a la naturaleza del instituto de la Agencia de Acceso a la Información Pública, toda vez que tendrá la función de contralor, conforme reza el artículo 1° del título Preliminar, en su parte pertinente:

“...Control: el cumplimiento de las normas que regulan el derecho de acceso a la información será objeto de fiscalización permanente...”.

Sin lugar a dudas, esta situación importará la afectación de la independencia de la Agencia, en cuanto a la observancia de la aplicación de la ley en todos sus alcances.

Ello se ve además corroborado, en la propia previsión del artículo 27, que en su parte pertinente establece lo siguiente: “Remoción del director de la Agencia de Acceso a la Información Pública. El funcionario a cargo de la Agencia de Acceso a la Información Pública podrá ser removido por mal desempeño, por delito en el ejercicio de sus funciones o por crímenes comunes. El Poder Ejecutivo nacional llevará adelante el procedimiento de remoción del director de la Agencia de Acceso a la Información Pública, dándole intervención a una comisión bicameral del Honorable Congreso de la Nación, que será presidida por el presidente del Senado y estará integrada por los presidentes de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Derechos y Garantías de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, y las de Asuntos Constitucionales y de Libertad de Expresión de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, quien emitirá un dictamen no vinculante.”

Conforme lo referido, el director de la Agencia podrá ser removido mediante la sola voluntad del Poder Ejecutivo nacional, participando el Honorable Congreso de la Nación de manera no vinculante.

En virtud de ello, esto importa convalidar un grave condicionamiento por parte del Poder Ejecutivo a la independencia que debe guiar las decisiones de la Agencia de



## Dirección de Información Parlamentaria

### Acceso a la Información Pública.

Por las razones antes referidas, vengo a manifestar mi decisión de abstenerme, no acompañando el proyecto remitido por el Poder Ejecutivo nacional en los términos propuestos, solicitando la inserción respectiva del fundamento de las observaciones antes expresadas.

## 51. INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO SPINOZZI

### Derecho de Acceso a la Información Pública.

El reclamo de transparencia respecto de los actos de gobierno fue una de las primeras demandas populares en nuestro país. Al grito de “El pueblo quiere saber”, aquella fría y lluviosa mañana del 25 de mayo de 1810 la Primera Junta de Gobierno, presidida por Cornelio Saavedra, comenzaba el camino hacia nuestra emancipación. No era para menos dicho reclamo. El rey Fernando VII estaba preso en Bayona y España era regida por José Bonaparte, hermano de Napoleón. Nadie sabía cuál sería el destino del virreinato, y el multitudinario pedido de información dirigido a quienes se estaban haciendo cargo de tan crítica situación aceleró la toma de decisiones en las cuales la participación ciudadana fue crucial. Seis años más tarde, en Tucumán se declaraba nuestra independencia.

Transcurridos ya más de doscientos años desde aquella gloriosa madrugada, el derecho del pueblo a ser informado sigue siendo el mismo. El acceso a la información pública, la necesidad de contar con un gobierno abierto, es un derecho de todo ciudadano. Todos tenemos el derecho a acceder a la información pública y a que se nos la brinde de manera rápida, completa y efectiva. Saber cómo se gasta el dinero público, qué se está haciendo o dejando de hacer para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, por qué se decidió hacer algo de una manera y no de otra, cuál es el patrimonio de un funcionario al inicio de su gestión y cuál cuando deja su cargo, en qué condiciones se contrató con determinada empresa, cómo se cumplen las etapas de las licitaciones, de qué manera se está ejecutando una obra pública, etcétera, es un derecho ineludible de los administrados, y brindarla de manera rápida y exacta, insisto, es una obligación del Estado.

En nuestro país, el derecho a contar con la información pública tiene estatus constitucional. Ya el artículo 1º de la Constitución Nacional establece para Argentina la forma republicana de gobierno. El libre acceso a la información acerca de los actos de gobierno es uno de los pilares de todo régimen en el que lo que se administra es la cosa pública. El ocultamiento de la información pública, por el contrario, es un ardid propio de los totalitarismos y las tiranías para poder llevar a cabo sus tropelías y abusos de espaldas al bien común de la ciudadanía y sin el menor atisbo de tener que rendir cuentas a nadie por ello.

Por si acaso el artículo 1º no fuera suficiente para fundamentar el valor del gobierno abierto en una república, desde la reforma de 1994 se ha dado rango constitucional a



#### Dirección de Información Parlamentaria

determinados derechos considerados fundamentales emanados de los tratados internacionales suscriptos por nuestro país. El artículo 75, inciso 22, de nuestra carta magna, entonces, asigna jerarquía constitucional a tratados como la Convención Americana de Derechos Humanos Pacto de San José de Costa Rica, cuyo artículo 13 reconoce que el derecho a la libertad de expresión y de pensamiento que toda persona tiene, comprende también a la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole.

La Declaración Universal de Derechos Humanos, por su lado, reconoce ese mismo derecho cuando establece en su artículo 19 que “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.

Además, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dispone en su artículo 19-2 que “Toda persona tiene el derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”.

La totalidad de la doctrina coincide en que los derechos constitucionales son operativos per se, es decir que no necesitan estar reglamentados para que los ciudadanos puedan hacer uso de ellos; no obstante ello es conveniente que haya leyes especiales que faciliten su ejercicio. La legislación argentina no cuenta aún con una ley que reglamente la manera en que los ciudadanos puedan requerir al Estado la información pública. Dicha falencia hace que los ciudadanos que no encuentran respuestas por parte de los funcionarios deban recurrir al Poder Judicial para obtenerlas luego de un engorroso proceso.

La única norma vigente referida al acceso a la información pública es el decreto presidencial 1.172 de 2003. Dicha norma significó un primer paso en la regulación de este básico derecho constitucional, aunque su alcance es limitado ya que circunscribe el ejercicio de dicho derecho solo a la información en manos del Poder Ejecutivo nacional. Sin embargo, por diversos motivos resulta fundamental contar con una ley nacional ad hoc, siendo los principales garantizar el acceso a los datos que pudieran tener los otros poderes del Estado y la legitimidad de origen que se otorga a una norma emanada del Congreso Nacional. Además, el decreto 1.172/03 no deja de resultar contradictorio, ya que quien tiene la información que con mayor transparencia requiere ser divulgada, se autorregula indicando la manera en que la debe dar a conocer.

Garantizar por ley la transparencia de los actos de gobierno y el libre acceso a la información pública por parte de la sociedad civil es una eficaz herramienta de calidad institucional contra la corrupción. Así lo establecen los artículos 10 y 13 de la Convención de la Naciones Unidas contra la Corrupción. Lo mismo dicen los artículos III.11 y XIV de la Convención Interamericana contra la Corrupción.

A dicho respecto vale traer a colación los resultados de los informes emanados de la organización Transparencia Internacional. Dichos informes miden la percepción de la corrupción que existe en el sector público en la mayoría de los países. La falta de transparencia en las acciones de los funcionarios estatales y la falta de información pública son síntomas de un ambiente propicio para cometer actos de corrupción.

La transparencia actúa como un gran desincentivo para los actos de corrupción y, al



#### Dirección de Información Parlamentaria

mismo tiempo, facilita que las transgresiones salgan a la luz cuando ellas ocurren. Este índice de percepción de la corrupción contribuye a medir la situación en la cual se encuentra un país respecto al grado de transparencia que hay en el Estado.

El deterioro en materia de corrupción en nuestro país ha venido siendo registrado por el índice de Transparencia Internacional desde hace más de diez años. En 2003 Argentina, según Transparencia Internacional, se ubicaba en el puesto 92. En el ranking de 2015 nuestro país ocupó el puesto 107 junto con Bielorrusia y Costa de Marfil, ocho posiciones por debajo de Bolivia, país que se encuentra en el puesto 99. Nuestro vecino Uruguay se encuentra en el puesto 21 de dicho ranking mientras que Chile ocupa el 23. Brasil, pese a la crisis de corrupción por la que está atravesando su gobierno, está en la posición 76. De entre nuestros vecinos, solamente Paraguay tiene una peor calificación que la de Argentina, ocupando el lugar 130.

El Estado argentino está en deuda con su ciudadanía en relación con el libre acceso a la información pública. Por dicho motivo debe haber una ley que consagre y reglamente el ejercicio de ese derecho. En tal sentido, la propuesta del Poder Ejecutivo al Congreso Nacional representa una legislación moderna y eficiente, que aumentará las potestades de control ciudadano y, por ende, reducirá la discrecionalidad que el Estado había desarrollado durante los últimos años.

## **52 INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO WECHSLER**

### **Derecho de Acceso a la Información Pública**

Hoy celebramos este paso fundacional en nuestros derechos como ciudadanos, que es la sanción de la Ley al Acceso a la Información Pública, porque el gobierno abierto forma parte de un ecosistema virtuoso, que busca alcanzar una política de transparencia activa.

Fortalecer la ciudadanía es un factor fundamental, y esto no puede suceder sin un adecuado acceso a la información pública. En nuestro sistema político, la democracia, o gobierno del pueblo, los ciudadanos tienen derecho a conocer los datos de gobierno, y el acceso a la información es un derecho fundamental por sí mismo, reconocido por nuestra Carta Magna, dado que garantiza que otros derechos como la salud, la educación, etcétera, se lleven adelante. Pero no solo está reflejado allí, sino que se está cumpliendo con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano surgida en el Pacto de San José de Costa Rica y reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin información nunca se fortalecerá el sistema democrático. Además, el acceso a la información es sinónimo de transparencia del Estado; conocer cómo y en qué se gasta el dinero de todos, brinda un marco de control y nitidez, facilitando el control ciudadano y la rendición de cuentas: Por lo tanto, previene la corrupción y fomenta la participación.

Tenemos que tener en cuenta que el acceso a la información no es un favor del Estado, es una obligación inexcusable del mismo con la ciudadanía. El acceso a la información no puede quedar librado a la buena voluntad, razonabilidad o criterio de algún

## Dirección de Información Parlamentaria

funcionario o juez, sino que es necesario normar para que los tres poderes del Estado y todos los actores que reciben fondos públicos den cuenta de sus acciones en el marco de una ley.

Este paso adelante tiene que ver con la transparencia, y la misma puede ser activa o pasiva. La transparencia pasiva se formaliza por medio de solicitudes de información al Estado por parte de algún actor civil. La transparencia activa se da cuando el Estado publica proactivamente la información, y lo puede realizar a través de políticas de datos abiertos, utilizando licencias y formatos reutilizables.

Los datos abiertos son una herramienta clave para mejorar la rendición de cuentas, y a su vez potencian desarrollos innovadores por parte del Estado o de terceros.

La tecnología permite procesar grandes volúmenes de datos en cuestión de segundos, a diferencia de tener que leer o analizar infinitos formatos de documentos portátiles (PDF), que no son procesables por una computadora. En los tiempos que corren, no trabajar los datos públicos en formatos abiertos, atenta contra la modernización del Estado.

Siguiendo esa línea se firmó el decreto de modernización, que incluye un capítulo de gobierno abierto, el cual es ampliado por esta ley y le da un valor agregado. Además, lo extiende a los tres poderes del Estado.

Con la utilización del expediente electrónico ya se está trabajando para tener un sistema de acceso y seguimiento a través de Internet, lo que consecuentemente agiliza y hace transparente el proceso.

Desde el Poder Ejecutivo existe la voluntad política para gestionar en forma transparente desde el primer momento. En términos de información pública, se puede hablar de la política general de gobierno abierto que se está haciendo desde el Ministerio de Modernización, a cargo del Ministro Andrés Ibarra, quien ya comenzó con esta filosofía de gobierno a través del portal de datos .gob.ar.

Nuestro país estaba en el puesto número 56 en términos de gobierno abierto. Desde la nueva gestión, ya se lanzó el decreto de gobierno abierto específico, y se intentará llegar este año a que Argentina esté entre los primeros diez países. Además, se está avanzando en el Plan de Datos y asumiendo compromisos públicos con la Organización de Gobierno Abierto Internacional (OGP).

Como ejemplo en los meses de gestión recorridos, podemos mencionar el caso del Ministerio de Energía y Minería, que ya comenzó a publicar los nombramientos, las estructuras, las compras, etcétera.

Por último, quisiera resaltar que el proyecto tratado respeta los estándares internacionales en la materia, y estaríamos como desde hace cinco meses insertando a nuestro país en el sistema internacional nuevamente, con desarrollos innovadores.